

IMPACTOS Y DESAFÍOS DE LA COVID-19 EN URUGUAY

*Bibiana Lanzilotta
Gabriela Mordecki*

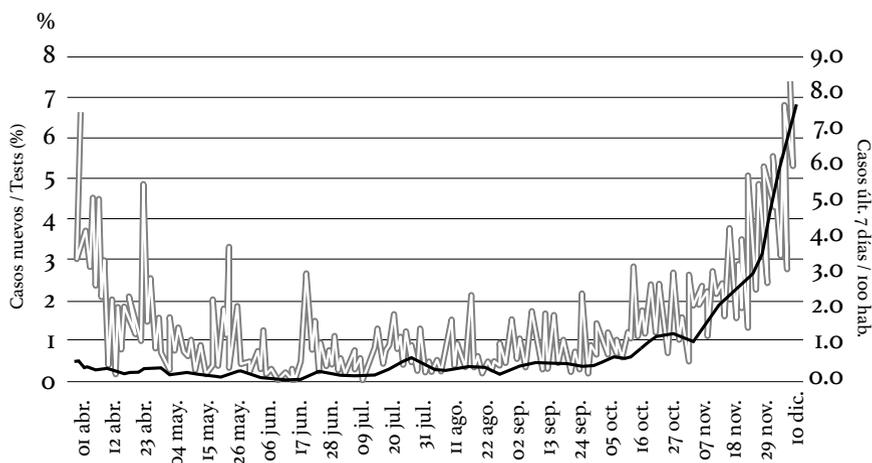
Introducción

El 1º de marzo de 2020, en Uruguay, tomó posesión un nuevo gobierno conformado por una coalición de centro-derecha, de signo opuesto al gobierno anterior. A partir del 13 de marzo, se declaró la emergencia sanitaria por la aparición de los primeros casos de la Covid-19 en el país, lo que implicó un gran desafío para un gobierno que recién empezaba a instalarse. Por ese motivo, se sucedieron las conferencias de prensa del presidente y algunos de sus ministros vinculadas al tema del seguimiento de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla. Esto se tradujo en una tasa de aprobación del gobierno del 60 por ciento, la cual se ha mantenido relativamente estable durante todo el año.

Una de las características de Uruguay es que, además de ser un país pequeño, abierto y altamente dependiente del mercado externo, tiene una pirámide demográfica similar a la de un país desarrollado, con alrededor del 15 por ciento de mayores de 65 años. Asimismo, el sistema de salud uruguayo presenta fortalezas significativas, ya que coexisten en forma coordinada un prestador público y actores privados que brindan cobertura integral. Asimismo, la existencia de la figura del médico a domicilio y la realización de consultas por telemedicina ha sido fundamental para controlar la propagación del virus y evitar que las personas contagiadas se dirigieran a centros sanitarios.

La evolución de contagios, medida por el índice de Harvard que considera el promedio de casos positivos de la última semana por cada 100 000 habitantes, se mantuvo relativamente controlada y en la zona verde hasta fines de setiembre, cuando hubo un cambio de tendencia que implicó el ingreso a la zona de riesgo color amarillo y sin perspectiva de retornar a sus niveles previos (Harvard Global Health Institute, 2020).

GRÁFICA I
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA COVID-19 EN URUGUAY



FUENTE: IEcon (2020).

En Uruguay, es importante el despliegue de la infraestructura en telecomunicaciones que permitió que se implementara el teletrabajo en forma inmediata en aquellos sectores en los que fuera posible realizar dichas actividades. Al respecto, en el mes de abril (uno de los meses de mayor confinamiento), el 19,3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional realizaba teletrabajo. Esa cifra fue descendiendo progresivamente hasta alcanzar el 7,5 por ciento en setiembre de 2020.

Por otra parte, la existencia del Plan Ceibal, iniciativa gubernamental implementada desde 2007 y pionera en la entrega de una laptop para cada niño, facilitó la continuidad de la educación a distancia, incluso como apoyo en el modelo híbrido educativo con el retorno de las clases presenciales. Dicho programa posicionó a Uruguay como el primer y único país que universalizó el acceso a los niños a las computadoras de escuela pública. De acuerdo con cifras de la Unicef (2020), el 77 por ciento de los niños de primaria pudieron continuar con su educación en los meses de confinamiento voluntario, mientras que el 23 por ciento no se conectó por diferentes motivos. El retorno a clases el 1º de junio de 2020 fue voluntario, por etapas y gradual. Se volvió en cuatro etapas, durante los meses de abril y junio, definidas por criterios sanitarios y de priorización de la población. Los primeros

centros educativos en retomar las clases fueron las escuelas rurales de menor cantidad de alumnos y, posteriormente, las escuelas de las zonas urbanas.

Principales medidas del gobierno para enfrentar la pandemia

Inmediatamente, luego de la detección de los primeros casos de la Covid-19, y al tomar como referencia lo sucedido en los países del hemisferio norte que eran impactados por la pandemia con un trimestre de antelación, las autoridades nacionales establecieron una serie de medidas tendientes a reducir la propagación del contagio y atenuar los impactos sociales. Asimismo, el gobierno conformó un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) integrado por destacados científicos uruguayos tanto a nivel nacional como internacional que realizaron recomendaciones científicas en el tránsito hacia la nueva normalidad. Este equipo se conformó de dos grupos de trabajo, uno vinculado a la planificación de salud, asistencia y prevención, y otro vinculado a la ciencia de datos.

Con el objetivo de atenuar el impacto del confinamiento voluntario, el gobierno implementó una serie de medidas dirigidas a las empresas y a la población. En el caso de las empresas, la más importante fue la flexibilización del uso del seguro de desempleo, así como la habilitación a recurrir al trabajo por menor tiempo e incluso por medio horario para contemplar los sectores afectados por la paralización parcial de sus actividades. A las categorías existentes (despido y suspensión) se incorporó el subsidio parcial, que permite a quien trabaja el 50 por ciento de la jornada pagada por la empresa y recibir un subsidio del Estado del 25 por ciento del salario por las horas que deja de trabajar. Inicialmente, estos subsidios iban a ser por seis meses, pero, debido a la situación, se han ido extendiendo en el tiempo. Por otra parte, se considera que el personal de la salud es clave para gestionar la situación de la emergencia sanitaria, se extendió la cobertura de seguro de salud a todos los médicos del país.

Asimismo, para incentivar que las empresas retomen al personal, se les otorgó un descuento en las cargas sociales que deben abonar por cada trabajador contratado nuevamente. Además, para las pequeñas y medianas empresas, el gobierno dispuso nuevas líneas de crédito a bajas tasas y con garantías estatales que les permitiera mantener el capital corriente. También

se aplazaron los vencimientos de pago de impuestos y cargas sociales permitiendo el pago en cuotas sin interés a partir de determinada fecha.

En el caso de las medidas destinadas a la población, además del impacto de los subsidios por desempleo se duplicaron las ayudas que mensualmente reciben las familias más pobres por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por un monto aproximado de 80 dólares por familia, pagadero en 2 cuotas mensuales, lo cual se repitió varias veces en el año. Asimismo, la cobertura se extendió y la entrega de canastas de alimentos incluyó a los trabajadores informales no registrados en el sistema.

Otra de las medidas definidas por el gobierno fue la conformación del Fondo Coronavirus compuesto por el aporte, durante dos meses, de salarios de funcionarios públicos y jubilados, con sueldos líquidos superiores aproximadamente a los 2000 dólares estadounidenses, a los cuales se les realizó un descuento, en una escala del 5, 10 y 20 por ciento, según los valores nominales percibidos. El objetivo de este fondo fue la obtención de financiamiento adicional para las medidas implementadas (aumentar la cantidad de testeos, equipamiento, ayudas, etc.). El gasto estimado para enfrentar la emergencia sanitaria por parte del gobierno asciende a 796 000 000 de dólares estadounidenses, equivalente al 1.6 por ciento del PIB, de los cuales el 51.5 por ciento (396 000 000 de dólares estadounidenses) corresponde a las prestaciones por seguro de desempleo; el 19.7 por ciento (157 000 000 de dólares estadounidenses) a renuncia fiscal (resignación de aportes); y el 14.5 por ciento (116 000 000 de dólares estadounidenses) asistencia social, entre los conceptos más importantes.

En lo referido al ámbito de las medidas de salud, una de las más importantes fue el aumento de la capacidad de testeo de la población, con una acción conjunta con los investigadores de las facultades de Ciencias y Medicina, el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, el Instituto Clemente Estable y el Instituto Pasteur para el desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular que facilitarán la detección de casos de la Covid-19. Esto permitió pasar de un promedio de 500 pruebas diarias, en los meses de marzo a abril, a 3700 en noviembre. A su vez, se estableció un equipo de rastreadores que se ha ido ampliando en el transcurso de los meses y que, una vez que se detecta un caso positivo, tiene como función identificar y ubicar a los contactos para que se mantenga la trazabilidad del hilo epidemiológico.

Finalmente, entre las medidas más relevantes, cabe mencionar el desarrollo de la aplicación Coronavirus.uy disponible para dispositivos móviles que permitió conectar a personas con posibles síntomas del virus con los prestadores de salud, a fin de reducir los tiempos de espera en consultas y atención ante la emergencia sanitaria. Por otra parte, la aplicación envía una alerta a las personas que hayan estado en contacto con un caso positivo.

Impacto de la pandemia

Previo a la llegada de la Covid-19, la economía uruguaya mostraba indicadores desafiantes de revertir en el corto plazo en el marco de un contexto regional que desde hace años mostraba caída de la actividad económica y en algún caso fuertes desequilibrios macroeconómicos. En efecto, en el año 2019, el PIB registró una variación de apenas el 0.2 por ciento sugiriendo la culminación de la fase expansiva de la economía de los últimos 15 años, y una tasa de inflación anual del 7.9 por ciento. Por otra parte, el déficit fiscal medido como porcentaje del PIB se situó en un 4.7 por ciento siendo el mayor de la década. El mercado de trabajo tampoco indicaba noticias alentadoras: en el año 2019, la tasa de empleo se situó en un 56.7 por ciento (en 2018 fue del 57.2 por ciento) con un consecuente aumento en la tasa de desempleo que cerró el año 2019 en un 8.9 por ciento (el 8.2 por ciento en 2018) siendo los trabajadores del sector privado los más afectados.

A diferencia de lo observado en otros países, el gobierno uruguayo no estableció un confinamiento obligatorio, sino que apeló a la libertad responsable de los individuos para que redujeran la movilidad y la interacción social. Esa premisa se reforzó con una serie de medidas que tuvieron impacto en la oferta doméstica debido a que se exhortó a los propietarios de los establecimientos comerciales a reducir la actividad lo máximo posible en forma transitoria. Por otra parte, la suspensión de las actividades presenciales educativas en todo el país, y para todos los niveles, conjuntamente con la instrumentación del teletrabajo en el sector público y la correspondiente exhortación al sector privado (en la medida que fuera posible implementarlo) resultaron en una disminución inmediata de la actividad económica.

Una de las principales características de Uruguay es que es una economía pequeña y abierta, exportadora de *commodities*, tomadora de precios

del exterior y, por tanto, altamente dependiente del mercado internacional. En consecuencia, el shock doméstico fue incluso precedido por un impacto externo significativo ante la fuerte caída de la actividad económica vinculada al sector externo, reflejada en una menor demanda de nuestros principales socios comerciales (China, Brasil y Argentina).

Inicialmente, y con base en eventos recientes como la gripe H1N1 o el ébola, la opinión generalizada era que el impacto de la Covid-19 en la economía sería transitorio y, en la medida que se retomaran las actividades, se volvería a la actividad regular preCovid. Sin embargo, con el transcurso de los meses y la mayor información disponible, se vislumbró que este evento no era similar a otros, pues la velocidad de contagio y la facilidad de propagación no eran comparables.

Con respecto a la evolución de la actividad económica en este periodo, la información publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU, 2020) del PIB desestacionalizado indica que la economía se contrajo un 10.6 por ciento en el segundo trimestre de 2020 en relación con el trimestre de 2019, y un 9 por ciento en relación con el primer trimestre de 2020.

Los indicadores muestran que el desempeño del mercado interno tuvo una evolución desigual a nivel de sectores de actividad. El principal efecto se aprecia en las actividades comerciales con una retracción del consumo privado medido a través de la venta de automóviles con cero kilómetros como indicador de venta de bienes durables, con una caída del 9.8 por ciento en el tercer trimestre del año, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Adicionalmente, para el mismo periodo, la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) registró una variación del -0.4 por ciento.

Se torna aún más difícil que el mercado doméstico tenga un impulso adicional, pues, con el objetivo de mantener el nivel de contagios en relativo control y tomando como referencia lo sucedido con la propagación del contagio durante el verano en los países europeos, el gobierno dispuso que se mantengan cerradas las fronteras en la temporada estival que se avecina. El sector Turismo en Uruguay representa en el entorno un 9 por ciento del PIB, siendo una fuente significativa de ingresos de divisas y dinamización de la actividad económica para un mercado que, en sí mismo, es reducido. Aproximadamente, el 56 por ciento de los ingresos por turismo corresponden a viajeros provenientes de Argentina, el 17 por ciento de Brasil, el 17 por ciento del resto del mundo y el 10 por ciento de uruguayos no residentes. Si

bien se han establecido un conjunto de medidas para incentivar el turismo interno (exoneraciones impositivas principalmente), es difícil que el mercado interno compense en su totalidad el impacto de los turistas extranjeros tanto en volumen como en gasto.

En lo que concierne al mercado externo, el elevado grado de incertidumbre existente y el surgimiento de nuevas olas de contagio en Europa y Estados Unidos (que traen aparejado el restablecimiento de medidas de confinamiento) no permiten afirmar con certeza la permanencia de la recuperación del sector exportador, el cual posiblemente supondrá una nueva revisión a la baja del crecimiento económico de varios países y bloques económicos. Por otra parte, las regiones tanto Argentina como de Brasil se encuentran en recesión con una caída estimada del PIB del 10 y el 6 por ciento, respectivamente, para este año, que se suman a las caídas de los años precedentes.

En lo que atañe al mercado de trabajo es importante mencionar que no muestra señales de recuperación en el corto plazo. Específicamente, si bien la tasa de empleo alcanzó su mínimo en abril con el 52.1 por ciento, mantuvo un bajo dinamismo siendo un 54.1 por ciento en setiembre de 2020, una tasa más baja en relación con el escenario pre-Covid.

En contrapartida, la tasa de desempleo permanece en ascenso continuo situándose, en setiembre, en un 11 por ciento de la población económicamente activa. Esto indica que el ajuste se está haciendo mediante la pérdida de puestos de trabajo.

Esto se confirma si analizamos la evolución de las solicitudes de subsidio por desempleo donde se aprecia que el subsidio parcial ha tenido una creciente participación en el total de solicitudes desde su creación en marzo de 2020. Específicamente, el 65.7 por ciento del total de solicitudes entre los meses de julio y agosto corresponden a esta categoría. El indicador más preocupante es el creciente aumento de los despidos en el total de solicitudes alcanzando el 25 por ciento del total para agosto de 2020, y un promedio del 11.7 por ciento para el periodo de marzo-agosto. Asimismo, el 25 por ciento de los trabajadores de la economía estaban en la informalidad y, por tanto, no fueron cubiertos por esta medida.

Si bien las medidas de asistencia implementadas por parte del Estado tienen un objetivo paliativo, no resuelven el problema de fondo de empleo sostenible que ya estaba presente antes de la pandemia. La Covid-19 agravó aún más las dificultades del mercado de trabajo.

CUADRO I
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SEGURO POR DESEMPLEO

<i>Solicitudes de Seguro por Desempleo - Información mensual</i>							
	<i>Mar. 20</i>	<i>Abr. 20</i>	<i>May. 20</i>	<i>Jun. 20</i>	<i>Jul. 20</i>	<i>Ago. 20</i>	<i>Total</i>
Suspensión + reducción	75.090	62.473	23.967	18.059	15.329	11.346	206.264
Despidos	6.689	4.938	3.722	3.894	4.209	3.777	27.229
Subtotal causales tradicionales	81.779	67.411	27.689	21.953	19.538	15.123	233.493
Seguro parcial	1.402	19.797	30.207	38.775	37.029	31.878	159.088
Total	83.181	87.208	57.896	60.728	56.567	47.001	392.581
Despidos/Total	8.2%	7.3%	13.4%	17.7%	21.5%	25.0%	11.7%
Seguro parcial/ Total	1.7%	22.7%	52.2%	63.9%	65.5%	67.8%	40.5%

FUENTE: Banco de Previsión Social (2020).

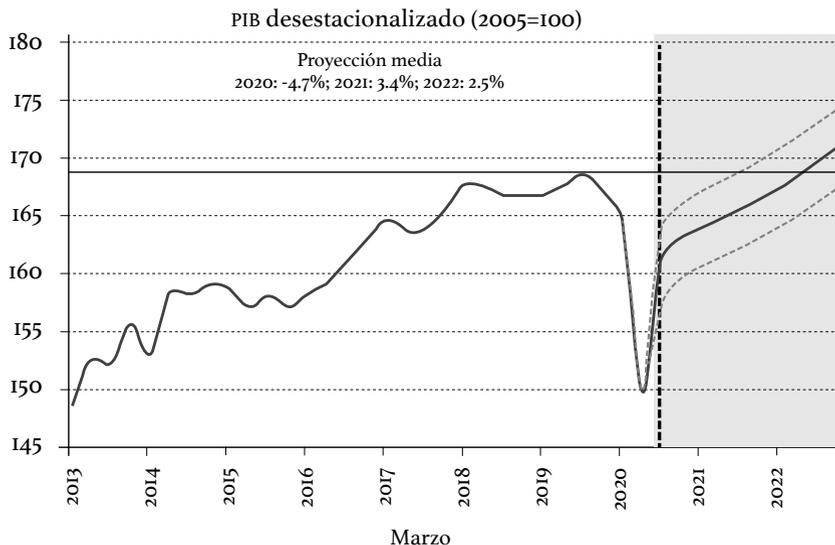
Una de las vulnerabilidades actuales de la economía uruguaya es el déficit fiscal que, a su vez, condiciona los grados de libertad en el manejo de la política económica (Blackman *et al.*, 2020). En este sentido, las autoridades deben mantener el delicado equilibrio entre el control del déficit fiscal y el nivel de actividad e ingresos. Específicamente, el resultado fiscal en los doce meses terminados en setiembre de 2020 fue del -5.4 por ciento del PIB, y se proyectó que al cabo del año se ubicara alrededor del 6.5 por ciento. Esto implicaría un incremento de la deuda pública, que al cierre de 2019 se ubicaba en un 70 por ciento del PIB, y que se pensaba podría llegar a representar el 75 por ciento del PIB a fines de 2020. En consecuencia, si bien las medidas de asistencia parecen ser limitadas para la gravedad de la situación en la medida que no se tiene plena certeza de la duración de este fenómeno y debido al avance sostenido de los casos de las últimas semanas, el gobierno tiene margen de acción en caso de que sea necesario extender los programas de asistencia económica por más tiempo y mayor cobertura.

Un hecho estilizado que se desprende de la literatura económica es que, en periodos de mayor incertidumbre, es mayor la discrepancia de pronósticos realizados por expertos, siendo los periodos de recesión económica cuando se visualiza más este fenómeno, debido a que las recesiones son acontecimientos relativamente poco frecuentes (Bloom, 2014; Ferderer, 1993). La

hipótesis subyacente es que la falta de previsibilidad y la gran divergencia entre los analistas son signos de una mayor incertidumbre económica.

Si bien la economía uruguaya no ingresó en recesión hasta el segundo trimestre, sino que registró una desaceleración de la actividad, la mayor incertidumbre asociada se puede apreciar en el ajuste de las proyecciones económicas para el año 2020. En efecto, a fines del año 2019 se estimaba un crecimiento del 1.7 por ciento de la economía, mientras que en mayo de 2020 la mediana de la encuesta de expectativas del BCU (2022) proyectaba una caída del PIB del 2.6 por ciento. En la encuesta de octubre de ese año se ajustó a la baja esa caída al 4.2 por ciento. Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proyectó una contracción del 5 por ciento del PIB, y el FMI estimó un descenso del 4.5 por ciento. Las proyecciones realizadas por el Instituto de Economía (Iecon) indicaron una caída del 4.7 por ciento hacia 2020, y en 2022 se retomaría el nivel de actividad de 2019.

GRÁFICA 2
ACTIVIDAD ECONÓMICA: EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL PIB



FUENTE: Elaboración propia con base en información del Banco Central del Uruguay (2020).

Por el lado del sector externo es difícil vislumbrar que pueda convertirse en el sector dinámico que empuje al crecimiento de la economía, ya que

está debilitado por la caída del comercio mundial, los precios internacionales y la falta de recuperación de la competitividad y el precio de la economía uruguaya.

En síntesis, en Uruguay, las medidas ejecutadas para gestionar la pandemia, en lo relativo al contagio del virus, parecen haber sido hasta el momento efectivas. Asimismo, la infraestructura de telecomunicaciones y el sólido sistema de salud parecen haber dado elementos para que también se pueda hacer frente a la situación de distanciamiento social. Sin embargo, se manifestó una preocupación bastante generalizada de que los impactos económicos y sociales podrían ser muy profundos, muchos de ellos desconocidos aún. Por otra parte, es fundamental la recomposición de la actividad económica y, en caso de que no se efectúe, que se implementen en tiempo y forma las medidas necesarias para la reactivación, de manera que no se deteriore aún más la estructura social.

Reflexiones finales

El arribo de la Covid-19 en Uruguay encontró una economía con dificultades macroeconómicas en sus principales indicadores: estancamiento, déficit fiscal, pérdida de competitividad, crecientes tasas de desempleo e inflación. No obstante, el país cuenta con un buen perfil de deuda pública y reservas internacionales. Asimismo, en caso de ser necesario, tiene un respaldo de líneas contingentes de créditos con organismos multilaterales y una excelente reputación en los mercados internacionales en relación con el cumplimiento de las obligaciones financieras, el respeto por el marco normativo legal y las Instituciones.

Cabe señalar que las vulnerabilidades macroeconómicas estaban presentes antes de la pandemia. La llegada de la Covid-19 hizo más desafiante el escenario. Existe consenso en que la política económica debe focalizarse en amortiguar la reducción de la actividad económica y la pérdida de ingresos. Sin embargo, el gobierno deberá gestionar el delicado equilibrio entre el déficit fiscal y la pérdida de ingresos debido a la contracción de la actividad económica, así como la renuncia fiscal por las medidas tendientes a mitigar el impacto de la pandemia.

Por otra parte, aunque en el periodo de confinamiento voluntario la economía no se paralizó, la gradual reactivación de las diversas actividades que han tenido lugar en los meses posteriores no se tradujo en una reincorporación de los puestos de trabajo, lo que impactó directamente las condiciones de empleo e ingresos de la población.

El escenario a futuro para la economía nacional se avizora muy desafiante debido a que tiene un mercado interno contraído, sin un claro factor dinamizador en el corto plazo y con las fronteras cerradas al turismo. Esto se dificulta aún más por la existencia de un mercado de trabajo que presenta una pérdida significativa de puestos de trabajo y un elevado nivel de informalidad. En este sentido, el principal desafío será evitar o mitigar la destrucción del entramado productivo y aliviar el impacto sobre la población. Se estima que el crecimiento de la pobreza ascenderá al 11.6 por ciento, representando un incremento del 35.6 por ciento en relación con el año anterior. Además, cada 0.1 por ciento adicional de contracción del PIB incrementa aproximadamente 0.21 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza (Brum y De Rosa, 2020).

Asimismo, es importante la creación de puestos de trabajo genuinos y sostenibles que agreguen valor a la estructura productiva. Para ello será fundamental mejorar la competitividad con el objetivo de que ésta no sea una limitante para captar mayor inversión del sector privado.

En relación con las características sociodemográficas, Uruguay tiene una estructura demográfica similar a la de los países desarrollados con un 15 por ciento de la población mayor de 65 años. Los niveles más elevados de desempleo se observan en los jóvenes, lo que compromete la capacidad de producción y crecimiento de la economía a futuro al enfrentar restricciones de capital humano.

Adicionalmente, en un escenario internacional donde predomina la incertidumbre, las restricciones al comercio complejizan más la situación de una economía pequeña, abierta y exportadora de bienes primarios como la uruguaya, altamente dependiente del mercado externo y de Argentina en particular en lo que refiere a inversión y turismo.

Fuentes

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)

2022 “Encuesta de Expectativas Económicas”, en <<https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/ieeso6io622.pdf>>.

2020 “Estadísticas y Estudios. Cuentas Nacionales e Internacionales y Sector Externo”, <<https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cuentas-Nacionales-e-Internacionales.aspx#cuentas-nacionales-trimestrales>>

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL (BPS)

s. f. “Prestaciones de actividad”, en <<https://www.bps.gub.uy/2683/prestaciones-de-actividad.html>>.

BLACKMAN, ALLEN, ANA MARÍA IBÁÑEZ, ALEJANDRO IZQUIERDO,

PHILIP KEEFER, MAURICIO MESQUITA MOREIRA,

NORBERT SCHADY y TOMÁS SEREBRISKY

2020 *Public Policy to Tackle Covid-19: Recommendations for Latin America and the Caribbean*. Nueva York: Inter-American Development Bank, en <<https://publications.iadb.org/en/public-policy-to-tackle-covid-19-recommendations-for--latin-america-and-the-caribbean>>.

BLOOM, NICHOLAS

2014 “Fluctuations in Uncertainty”, *The Journal of Economic Perspectives* 28, no. 2: 153-175.

BRUM, MATÍAS y MAURICIO DA ROSA

2020 “Estimación del efecto de corto plazo de la Covid-19 en la pobreza en Uruguay”, Blog del Departamento de Economía, 2 mayo, en <http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Estimaci%C3%B3n_del_efecto_de_corto_plazo_de_la_covid-19_en_la_pobreza_en_Uruguay.pdf>.

FERDERER, PETER

1993 “Does Uncertainty Affect Investment Spending?”, *Journal of Post Keynesian Economics* 16, no. 1: 19-35.

HARVARD GLOBAL HEALTH INSTITUTE

2020 “Key Metrics for Covid Supression. A Framework for Policy Makers and the Public”, 1° de julio, en <https://globalepidemics.org/wp-content/uploads/2020/06/key_metrics_and_indicators_v4.pdf>.

INSTITUTO DE ECONOMÍA (IECON)

2020 “Aportes y análisis en tiempos de coronavirus” en <<https://fcea.udelar.edu.uy/blog/4388-aportes-y-analisis-en-tiempos-de-coronavirus.html>>.

UNICEF

2020 “Retomar la educación después del Covid-19”, en <<https://www.unicef.org/uruguay/retomar-la-educacion-despues-del-covid-19>>.